



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIII - N° 409

Bogotá, D. C., martes, 16 de abril de 2024

EDICIÓN DE 24 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 360 DE 2024 CÁMARA, 157 DE 2023 SENADO

por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 10 de abril de 2023.

Honorable Representante

ÓSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN

Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente.

Cámara de Representantes.

Ciudad.

Referencia: Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Honorable Representante:

En cumplimiento de la designación realizada por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 y ss., nos permitimos rendir **Informe de Ponencia Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la**

jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Cordialmente,

HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara

DELCY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA
Representante a la Cámara

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara

ORLANDO CASTILLO ADVINCULA
Representante a la Cámara

HERNÁN DARIÓ CADAVID
Representante a la Cámara

JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara

MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2024 Senado fue presentado por iniciativa del Ministro del Interior Fernando *Velazco Chaves*, el Ministro de Justicia y del Derecho Néstor *Iván Osuna Patiño*, la Ministra (e) de Agricultura y Desarrollo Rural *Aura María Duarte*, los honorables Senadores *Carlos Alberto Benavides Mora*, *Alexánder López Maya*, *Alfredo Deluque Zuleta*, *Alejandro Carlos Chacón*, *Wilson Arias Castillo*, *Clara López Obregón*, *Ariel Ávila Martínez*, *Julio Chagüi Flores*, *Aida Quilcué Vivas*, *Alejandro Vega Pérez*, *Julián Gallo Cubillos*, *Fabio Raúl Amín Salem*, *Berenice Bedoya Pérez*, *Pablo Catatumbo Torres*, *Robert Daza Guevara*, *Catalina del Socorro*

Pérez, Gloria Inés Flores Schneider, Isabel Cristina Zuleta López, Óscar Barreto Quiroga, Marcos Daniel Pineda, Imelda Daza Cotes, Alfredo Marín Lozano, Jairo Castellanos Serrano, Inti Raúl Asprilla Reyes, Carolina Espitia Jerez, Antonio Correa Jiménez, Édgar Díaz Contreras, Piedad Córdoba Ruíz, Alex Flores Hernández, Jahel Quiroga Carrillo, Aída Avella Esquivel, Sandra Ramírez Lobo, María José Pizarro, Martha Isabel Peralta; y los honorables Representantes Juan Carlos Wills Ospina, Gabriel Becerra Yáñez, Gabriel Parrado Durán, Agmeth Escaf Tijerino, Susana Gómez Castaño, Alejandro Ocampo Giraldo, Luis Alberto Albán Urbano, David Racero Mayorca, María del Mar Pizarro, Delcy Isaza Buenaventura, Juan Daniel Peñuela Calvache, Daniel Restrepo Carmona, Gerardo Yepes Caro, Alirio Uribe Muñoz, Heráclito Landínez Suárez, María Fernanda Carrascal, Jorge Tamayo Marulanda, Andrés Cancimance López, Gloria Arizabaleta Corral, Eduard Sarmiento Hidalgo, Pedro Suárez Vacca, Alejandro Toro Ramírez, Jorge Bastidas Rosero y Leyla Rincón Trujillo.

Radicado el día 20 de septiembre de 2023 y publicado en la **Gaceta del Congreso** número 1351 de 2023.

La Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente Senado nombró como ponentes para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado, a los honorables Senadores *Alexánder López Maya, Carlos Fernando Motoa Solarte, Alejandro Vega Pérez, Germán Blanco Álvarez, Alfredo Deluque Zuleta, Humberto De la Calle Lombana, María Fernanda Cabal y Julián Gallo Cubillos.*

Ponencia publicada en la **Gaceta del Congreso** número 1655 el 28 de noviembre de 2023.

El 12 de diciembre de 2023, se publica el informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate a Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado en la **Gaceta del Congreso** número 1771 de 2023.

El 13 de diciembre de 2023, fue publicada en la **Gaceta del Congreso** número 1776 la Carta de

Adhesión al Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado, suscrita por el Senador Iván Cepeda.

El día 13 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la votación de la ponencia positiva y mayoritaria para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El texto aprobado en la Plenaria del Senado fue publicado en la **Gaceta del Congreso** número 08 de 2024.

El 20 de febrero de 2024, mediante radicado SLE-CS-1101-2023, el presidente del Senado de la República, doctor *Iván Leónidas Name Vásquez*, remitió al presidente de la Cámara de Representantes doctor *Andrés Felipe Calle Aguas*, el expediente contentivo del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado y los archivos que lo componen.

El 22 de marzo de 2024, la Mesa Directiva de la Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de dicha corporación procedió, mediante oficio C.P.C.P. 3.1.-0887-2024, designar como ponentes para Primer Debate a los Honorables Representantes *Heráclito Landínez Suárez - C, Juan Carlos Lozada Vargas -C, Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, Catherine Juvinao Clavijo, Orlando Castillo Advíncula, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Marelen Castillo Torres y Luis Alberto Albán Urbano*, el día 21 de marzo de 2024.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

En cumplimiento del mandato contenido en el Acto Legislativo número 03 de 2023, el Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, tiene por objeto establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural a través de la modificación de la Ley 270 de 1996.

Con este propósito, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con cerca de 60 congresistas de diversos partidos políticos, radicaron el proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

El articulado del proyecto originalmente radicado consta de doce (12) artículos a saber:

| Número del artículo | Resumen del Contenido |
|---------------------|---|
| Art. 1° | Define el Objeto del Proyecto de Ley. |
| Art. 2° | Modifica el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 para incluir la Jurisdicción Agraria y Rural en la integración de la Rama Judicial. |
| Art. 3° | Modifica el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 para investir a la Jurisdicción Agraria y Rural de facultades jurisdiccionales. |
| Art. 4° | Modifica el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 con el fin de cambiar nombre de la “Sala de Casación Civil y Agraria” de la Corte Suprema de Justicia reemplazándolo por el nombre “Sala de Casación Civil, Agraria y Rural”, ya que el Acto Legislativo 03 de 2023 modifica la nominación de esta sala. |
| Art. 5° | Modifica el artículo 34 de la Ley 270 de 1996, y cambia el número de Magistrados del Consejo de Estado, aumentando la cifra de treinta y uno (31) magistrados a treinta y tres (33) magistrados. |
| Art. 6° | Modifica el artículo 36 de la Ley 270 de 1996 con el objetivo de ubicar a los dos magistrados adicionales en la Sección Primera del Consejo de Estado. |
| Art. 7° | Crea un nuevo capítulo en el título tercero de la Ley 270 de 1996. El nuevo capítulo que se propone incluir se compone de seis (6) artículos que establecen la creación de los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales, así como su integración y funciones, contemplando la posibilidad de que los juzgados tengan más de un juez si así lo considera necesario el Consejo Superior de la Judicatura. |
| Art. 8° | Modifica el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 que originalmente se ocupa de la “desconcentración y división del territorio para efectos judiciales” a fin de incorporar la figura de “Distritos Judiciales Agrarios y Rurales” en las disposiciones referidas a la desconcentración de la administración de Justicia en el territorio nacional. |

| Número del artículo | Resumen del Contenido |
|---------------------|--|
| Art. 9° | Establece los parámetros para la provisión de cargos en la Jurisdicción Agraria y Rural, definiendo que, entre las cualidades para la selección de los jueces y operadores de justicia en la jurisdicción agraria y rural deberán tenerse en cuenta amplios conocimientos en Derecho Agrario y Derecho Administrativo. |
| Art. 10 | Contiene las disposiciones referidas al presupuesto y los recursos para la operación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en atención a la solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| Art. 11 | Armonizar las modificaciones introducidas en el Acto Legislativo 03 de 2023 con la legislación y la Ley 270 de 1996. |
| Art. 12 | Establece que la Ley sometida a consideración rige a partir del momento de su promulgación. |

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

4.1 El Acto Legislativo 03 de 2023

En julio de 2023 el Estado colombiano cumplió, mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 con una parte de los compromisos adquiridos en los subpuntos 1.1.5 y 1.1.8 del Acuerdo Final de Paz, relativos con la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

El artículo 4° del referido Acto Legislativo 03 de 2023, *por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural*, estableció que:

“(…) Artículo 4°. El Congreso de la República tramitará y expedirá en la siguiente legislatura la Ley por medio de la cual se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el procedimiento especial agrario y rural. (...)”.

Como puede evidenciarse, la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria y Rural le asignó al Congreso de la República la responsabilidad de tramitar las normas para establecer las condiciones óptimas y necesarias para que se pudiera poner en marcha la nueva jurisdicción en la Rama Judicial. En consecuencia, el proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia cumple con una parte importante de ese mandato, a saber: establecer la estructura e integración de la nueva infraestructura judicial que dará forma y cuerpo a la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

4.2 Una infraestructura judicial especializada para las controversias agrarias

La creación de una Jurisdicción Agraria y Rural implica la creación de una infraestructura judicial nueva al interior de la Rama Judicial, concebida como autónoma y especializada en controversias y conflictos de naturaleza agraria y rural, capaz de atender las demandas de justicia de las poblaciones rurales en lo que respecta a sus relaciones de producción agraria y de tenencia de tierras rurales. De allí que el Acto Legislativo 03 de 2023 reconozca la importancia de la creación de esta jurisdicción para atender las necesidades de las poblaciones rurales campesinas y étnicas, y esté disponible, de manera prioritaria, en aquellas zonas con alta conflictividad agraria y rural.

En virtud de esta consideración, el Consejo Superior de la Judicatura ha iniciado el despliegue gradual y progresivo de las disposiciones necesarias para poner en marcha la nueva jurisdicción agraria y rural. En esa dirección, el 29 de diciembre de 2023

expidió el Acuerdo PCSJA23-12132 de 2023 “Por el cual se crea un distrito judicial, unos circuitos judiciales y unos despachos judiciales, con carácter permanente, en la jurisdicción Agraria y Rural y se dispone su implementación gradual y progresiva” en el que ordena la creación de un distrito judicial agrario y rural de Tunja conformado por cinco (5) circuitos agrarios y rurales de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja; Creación de tres (3) despachos de Magistrados del Tribunal Agrario y Rural; una Secretaria y los primeros cinco (5) juzgados de tipo agrario y rural, que entran a funcionar a partir del 2 de mayo de 2024.

Este esfuerzo adelantado por la rama judicial amerita correspondencia paralela por parte del Congreso de la República para garantizar -por vía de ley- las disposiciones necesarias para que se disponga la organización, estructura y recursos necesarios para la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en todo el territorio nacional.

Lo anterior, pone al legislador en la tarea de imaginar una jurisdicción a través de la cual se administre justicia a nivel nacional pero de forma diferenciada, considerando las circunstancias geográficas, productivas y ambientales de las zonas donde se espera lleguen las instituciones judiciales, y atendiendo a las características poblacionales de quienes son los potenciales usuarios de esta jurisdicción. Esta especificidad de la justicia agraria y rural requiere necesariamente de la puesta en marcha de dos procesos: la creación de tribunales y jueces especializados con presencia en las zonas con mayores demandas de justicia; y el establecimiento de instituciones distintas a las que hoy componen la rama judicial.

El proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia modifica los artículos 11, 12, 16, 34, 36, 50 agrega un Capítulo IV al Título Tercero de la Ley 270 de 1996, en los que se incluye en la estructura de la Rama Judicial la Jurisdicción Agraria y Rural, los jueces y tribunales agrarios y rurales que la componen. Asimismo, reafirma las reglas establecidas en el Acto Legislativo 03 de 2023 respecto de los criterios que deben primar en la definición de las zonas donde deben ser instalados los despachos judiciales y agrarios, y de la necesidad de que dicha tarea surja del trabajo colaborativo entre el Consejo Superior de la Judicatura y los Ministerios de Justicia y del Derecho y Agricultura y Desarrollo Rural. Finalmente, crea los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural, instituciones específicas para el servicio de la justicia agraria y la figura del facilitador/a agrario y rural.

El proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia contempla la creación de una estructura judicial agraria y rural conformada por:

- (a) Juzgados Agrarios y Rurales organizados en el nivel de Circuitos, y cuyas competencias están definidas con claridad en el Proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado, que actualmente cursa en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República.
- (b) Distritos judiciales agrarios y rurales sobre los que operan tribunales agrarios y rurales diferentes a los que actualmente operan para la jurisdicción ordinaria y/o contenciosa administrativa y cuyas competencias también están determinadas en el Proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado.

Se crean dos (2) figuras que concurren con la atención de las especificidades que implica una infraestructura judicial especializada para las controversias agrarias y rurales:

- **Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural:** son equipos interdisciplinarios de profesionales que apoyarán la labor de los juzgados agrarios y rurales en todo el proceso judicial, incluyendo las labores de peritaje, análisis de contexto, entre otras.
- **Facilitadores:** se trata de una persona que ofrecerá apoyo y orientación a las comunidades y usuarios de la justicia agraria en los territorios. Esta orientación consistirá en resolver dudas de

los usuarios y explicarles -por ejemplo- cuáles son los procedimientos de los procesos a los que quieren acceder, las condiciones mínimas de la acción agraria, los tiempos que tiene la justicia para ofrecer una respuesta, etc.

Es importante, tener en cuenta que la Ley original establece la posible creación de (33) Juzgados Agrarios y Rurales; y seis (6) Tribunales Agrarios y Rurales con competencia en todo el territorio nacional. No obstante, es una estimación ilustrativa a fin de posible impacto fiscal de la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y rural de esas características. El carácter no vinculante de este número de juzgados que se estima en el proyecto de ley original se debe a que la competencia para establecer la distribución y número de operadores judiciales necesarios es exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus competencias de administrador de la Rama Judicial.

Con respecto a la creación de dos (2) nuevas plazas para la sección primera del Consejo de Estado. Los autores de la presente ponencia resaltan que la creación de estas dos (2) plazas se refiere a lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto original con la solicitud realizada por el Consejo de Estado expresada en la fase de diseño del Proyecto de Ley, bajo la necesidad de contar con más magistrados para atender posibles congestiones judiciales que se presenten en el futuro. La creación de las dos plazas no se hizo para la Sección Tercera (que es la que conoce de asuntos agrarios) sino para la Sección Primera porque el Consejo de Estado manifestó que está en curso el traslado de competencias - en los asuntos agrarios- de la sección tercera a la sección primera.

5. Proposiciones presentadas en Plenaria del Senado de la República

En el curso de los dos primeros debates reglamentarios se presentaron las proposiciones relacionadas en el siguiente cuadro:

| Autor | Artículo del que se ocupa la proposición | Sentido de la Proposición | Decisión |
|---|--|---|---|
| Honorable Senadora Paloma Valencia (Partido Centro Democrático) | Artículo 9° | Reorganizar los cargos existentes en la Jurisdicción Ordinaria, sin aumentar ningún cargo burocrático adicional al ya existente. | Constancia. Comisión Primera Constitucional Permanente Senado. |
| Honorable Senador Humberto De la Calle Lombana | Artículo 11 Artículo 7° Artículo 16 Artículo 2° | Elimina la Sala Agraria y Rural y para estos asuntos la competencia radica en la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. | No aprobado. Comisión Primera Constitucional Permanente Senado. |
| Honorable Senadora Ana Paola Agudelo García (Partido MIRA) Honorable Senador Manuel Virgüez Piraquive (Partido MIRA) | Artículo 7° | Adicionar el siguiente inciso al nuevo artículo 56A de la Ley 270 de 1996, contenido en el artículo 7° del proyecto de Ley: “(…) En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.” | Aprobado por la Plenaria de Senado |

6. Impacto Fiscal

Antes de la radicación del proyecto de ley el 20 de septiembre de 2023, el anteproyecto fue sometido a revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de estimar el posible impacto fiscal que tendría la implementación de la estructura e integración de la Jurisdicción Agraria y Rural. Con base en el concepto referido, los autores de la iniciativa hicieron el cálculo de los costos eventuales que podría tener la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, refiriendo en la exposición de motivos del proyecto de ley, que la creación y operación de la nueva Jurisdicción “(...) podría implicar un impacto fiscal anual cercano a los \$134.816.305.080 pesos (año), partiendo del supuesto de que dicha estimación contemple:

1. Dos (2) magistrados-consejeros adicionales en el Consejo de Estado, con la respectiva vinculación en cada despacho de dos un (1) Auxiliar de Magistrado; cinco (5) sustanciadores; siete (7) Oficiales Mayores de Alta Corporación; cuatro (4) profesionales especializados Grado 33; y un (1) Chofer grado 06 (Costo \$16.737.239.906).
2. Fortalecimiento de cada despacho de la sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, con un (1) Magistrado Auxiliar, dos (2) Profesionales Especializados en Derecho Agrario Grado 33, y un (1) Profesional Grado 21, incluyendo el 20% de gastos inherentes por adquisición de bienes y servicios. (Costo \$11.426.281.068).
3. Cinco (5) Tribunales Agrarios conformados cada uno por tres (3) Magistrados, tres (3) Auxiliares Judiciales 01, y seis (6) Profesionales Grado 23, incluyendo un 20% por adquisición de bienes y servicios. (Costo \$21.630.590.670).
4. Cinco (5) Secretarías de Tribunal compuestas, cada una, por un (1) secretario de tribunal, un (1) oficial mayor de Tribunal, un (1) escribiente de Tribunal, un (1) técnico grado 11, un (1) citador grado 4, incluyendo un 20% por adquisición de bienes y servicios. (Costo \$3.789.337.500).
5. Doce (12) Centros Especializados de Apoyo Técnico, conformado cada uno por (1) coordinador (Profesional 20), y cinco (5) profesionales Grado 16, incluyendo un

20% por adquisición de bienes y servicios. (Costo \$ 14.437.491.482).

6. Treinta y dos (32) Juzgados Agrarios y Rurales, conformados cada uno por dos (2) Jueces Agrarios y Rurales, para un total de sesenta y cuatro (64) jueces de circuito; un (1) escribiente de circuito, un (1) facilitador (Profesional Grado 16), un (1) Secretario de Circuito, un (1) Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito, dos (2) Auxiliar Judicial 4, dos (2) Asistente Judicial 06, incluyendo un 20% por gastos inherentes por adquisición de bienes y servicios. (Costo \$66.795.364.454). (...)

Con lo anterior se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley 819 de 2003 en relación con la obligación de indicar en la exposición de motivos de los proyectos de ley el eventual impacto fiscal de las iniciativas que se tramiten ante el Congreso de la República.

Ahora bien, el pasado 5 de marzo de 2024, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió al Congreso de la República su concepto de impacto y disponibilidad fiscal acerca de la iniciativa. En el referido concepto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público finaliza con su análisis refiriendo lo siguiente:

“(...) atendiendo lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 y en consonancia con lo señalado en el artículo 10 de la iniciativa, referente a la garantía por parte del Gobierno nacional sobre los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, **se tienen previstos los recursos para atender la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural hasta por la suma de 134.8 mil millones de pesos (...)**”.

El anterior concepto opera como garantía de la existencia de los recursos necesarios para debatir y aprobar esta iniciativa legislativa que permitirá poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y de la Sentencia SU 288 de 2022.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Para dar trámite al presente Proyecto de Ley Estatutaria, en nuestra condición de ponentes, ponemos a consideración de la corporación el siguiente pliego de modificaciones, anotando que se solicita que los artículos no referidos en el siguiente cuadro se mantengan igual que en la versión aprobada en segundo debate en Plenaria de Senado de la República:

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| <p>Artículo 7º. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor: “(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV-A</p> <p><i>De la Jurisdicción Agraria y Rural de artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural</i> <i>La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales:</i></p> <p><i>1. Del órgano de Cierre</i></p> <p>Artículo 50A. Integración. <i>La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.</i></p> <p><i>2. De los Tribunales Agrarios y Rurales</i></p> <p>Artículo 51A. Jurisdicción. <i>Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.</i></p> <p>Artículo 52A. De la sala plena. <i>La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones:</i></p> <p><i>1. Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura.</i></p> <p><i>2. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento.</i></p> <p><i>3. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces Agrarios y Rurales del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.</i></p> <p><i>4. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales del mismo distrito.</i></p> <p><i>5. Las demás que le asigne la Ley.</i></p> <p><i>3. De los Juzgados Agrarios y Rurales</i></p> <p>Artículo 53A. Integración. <i>La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el Juzgado Agrario y Rural. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear jueces adjuntos en los despachos judiciales, asignando a cada uno el reparto individual de los procesos que corresponda para su conocimiento y decisión, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 63 de esta ley.</i></p> | <p>Artículo 7º. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor: “(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV-A</p> <p><i>De la Jurisdicción Agraria y Rural de artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural</i> <i>La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales:</i></p> <p><i>1. Del órgano de Cierre</i></p> <p>Artículo 50A. Integración. <i>La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.</i></p> <p><i>2. De los Tribunales Agrarios y Rurales</i></p> <p>Artículo 51A. Jurisdicción. <i>Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores <u>Agrarios y Rurales</u> ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.</i></p> <p>Artículo 52A. De la sala plena. <i>La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación, ejercerá las siguientes funciones:</i></p> <p><i>1. Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura.</i></p> <p><i>2. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento.</i></p> <p><i>3. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces Agrarios y Rurales del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.</i></p> <p><i>4. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales del mismo distrito.</i></p> <p><i>5. Las demás que le asigne la Ley.</i></p> <p><i>3. De los Juzgados Agrarios y Rurales</i></p> <p>Artículo 53A. Integración. <i>La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el Juzgado Agrario y Rural. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá implementar un plan y medidas de descongestión en los términos crear jueces adjuntos en los despachos judiciales, asignando a cada uno el reparto individual de los procesos que corresponda para su conocimiento y decisión, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 63 de esta ley.</i></p> | <p>Adicionar “Agrarios y Rurales” para mayor claridad y para evitar confusión con los tribunales de las otras jurisdicciones que integran la Rama Judicial. Se agrega una coma en el primer inciso “(...) <u>que integran la corporación, (...)</u>”, a efectos de facilitar la comprensión de la redacción y garantizar una adecuada puntuación al texto.</p> <p>El artículo 63 de la Ley 270 de 1997 sobre administración de justicia le da amplias facultades al Consejo Superior de la Judicatura para establecer medidas de descongestión judicial cuando se requiera, incluyendo la creación de jueces de apoyo itinerantes. Se elimina la expresión para evitar interpretaciones de la norma que limiten las facultades del Consejo Superior en la materia.</p> <p>Se elimina la expresión para evitar interpretaciones de la norma que limiten las facultades del Consejo Superior en la materia.</p> |

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Parágrafo 1º. La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.</p> <p>Parágrafo 2º. Los Juzgados Agrarios y Rurales contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera cèlere y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.</p> <p>Artículo 54A. Centros especializados de apoyo técnico agrario y rural. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural que, a su vez, estarán conformados por (1) Coordinador y cinco (5) profesionales seleccionados de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo. Los Centros Especializados de Apoyo Técnico serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de hasta un (1) Tribunal Agrario y Rural y dos (2) juzgados agrarios y rurales respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 55A. Facilitadores agrarios y rurales. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales de la Jurisdicción Agraria y Rural contarán con un facilitador agrario y rural, profesional en Derecho y/o profesiones afines, cuya función será proveer información y orientación jurídica a los ciudadanos interesados en acceder a los servicios de administración de justicia en asuntos y controversias relacionados con la jurisdicción territorial de los circuitos y distritos judiciales agrarios y rurales, las competencias y trámites requeridos a la justicia agraria y rural, las rutas de acceso a la administración de justicia agraria y rural, entre otros, y podrán desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de sujetos de especial protección constitucional. Los facilitadores agrarios y rurales prestarán un servicio público gratuito que busca la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia. En este sentido, no podrá cobrarse a los usuarios por los servicios de información y orientación jurídica.</p> <p>Parágrafo. La formación de los facilitadores estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su vinculación se hará conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 56A. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Agrarios y Rurales que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.</p> | <p>Parágrafo 1º. La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.</p> <p>Parágrafo 2º. Los Juzgados Agrarios y Rurales contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera cèlere y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.</p> <p>Artículo 54A. Centros especializados de apoyo técnico agrario y rural. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural que, a su vez, estarán conformados por (1) Coordinador y cinco (5) profesionales seleccionados de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo. Los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales hasta un (1) Tribunal Agrario y Rural y dos (2) juzgados agrarios y rurales respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 55A. Facilitadores agrarios y rurales. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales de la Jurisdicción Agraria y Rural contarán con un facilitador agrario y rural, profesional en Derecho y/o profesiones afines, cuya función será proveer información y orientación jurídica a los ciudadanos interesados en acceder a los servicios de administración de justicia en asuntos y controversias relacionados con la jurisdicción territorial de los circuitos y distritos judiciales agrarios y rurales, las competencias y trámites requeridos a la justicia agraria y rural, las rutas de acceso a la administración de justicia agraria y rural, entre otros, y podrán desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de sujetos de especial protección constitucional. Los facilitadores agrarios y rurales prestarán un servicio público gratuito que busca la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia. En este sentido, no podrá cobrarse a los usuarios por los servicios de información y orientación jurídica.</p> <p>Parágrafo. La formación de los facilitadores estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su vinculación se hará conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 56A. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Agrarios y Rurales que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.</p> | |

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|--|--|--------------------------------|
| <p><i>Parágrafo. En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales, éstos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.</i></p> | <p><i>Parágrafo. En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales, éstos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.</i></p> | |

6. CONFLICTO DE INTERÉS

Con base en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, según el cual el autor del proyecto y los ponentes presentan en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describe las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1°. El artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 quedará así: (...)

- a) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*
- b) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*
- c) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

- a) *Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo*

que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

- b) *Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*
- c) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.*
- d) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.*
- e) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.*
- f) *Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...).”.*

De lo anterior y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este proyecto de ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es

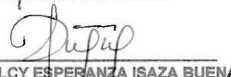
una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a) del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

7. PROPOSICIÓN


En relación con los puntos anteriormente expuestos y dada la importancia que esta iniciativa legislativa reviste, presentamos ponencia y solicitamos a los honorables miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes debatir y aprobar **Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones**, conforme al texto propuesto a continuación.


HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara

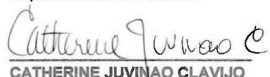

DELCY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA
Representante a la Cámara


ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA
Representante a la Cámara


JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara



MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara


JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara


CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara


HERNÁN DARÍO CADAVID
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara


LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

8. TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 360 DE 2024 CÁMARA, 157 DE 2023 SENADO

por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, en armonía con la Ley Estatutaria 270 de 1996 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2023.

Artículo 2º. Integración de la Rama Judicial. Agréguese un literal al artículo 11 de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:

“(…)

e) De la Jurisdicción Agraria y Rural:

- 1) Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en los asuntos de su respectiva competencia.
- 2) Tribunales Agrarios y Rurales.
- 3) Jueces Agrarios y Rurales. (…)”

Artículo 3º. Modifíquese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

“(…) Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción agraria y rural, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la Ley a otra jurisdicción.”

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, integrada por siete Magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve Magistrados. Salvo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción Agraria y Rural, las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos.

Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán como único fin tramitar y decidir los recursos de casación que determine la Sala de Casación Laboral de esta Corte. Los Magistrados de Descongestión no harán parte de la Sala Plena, no tramitarán tutelas, ni recursos de revisión, no conocerán de las apelaciones en procesos especiales de calificación de suspensión o paro colectivo del trabajo, ni de los conflictos de competencia, que en el ámbito de su especialidad se susciten, y no tendrán funciones administrativas. El reglamento de

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del reparto de los procesos.

Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida.

La elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución y la Ley para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas salas.”

Artículo 5º. Modifíquese el inciso primero del artículo 34 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 34. Integración y Composición. *El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y tres (33) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (...)*”

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 36º de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 36. De la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la Ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:

La Sección Primera, por seis (6) magistrados.

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados.

La Sección Tercera se dividirá en tres (3) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.

La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados, y

La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados.

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la Ley, el reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada Sección y a las respectivas Subsecciones.

En todo caso, la acción de pérdida de investidura de congresistas será de competencia de la sala plena de lo contencioso administrativo.

Parágrafo Transitorio. Los nuevos despachos que por medio de esta ley se crean para la integración de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrán la misma organización y estructura que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa Sección”

Artículo 7º. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:

(...)

Capítulo IV-A

De la Jurisdicción Agraria y Rural

Artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural. *La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales:*

1. Del órgano de Cierre

Artículo 50A. Integración. *La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.*

2. De los Tribunales Agrarios y Rurales

Artículo 51A. Jurisdicción. *Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores Agrarios y Rurales ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.*

Artículo 52A. De la Sala Plena. *La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones:*

1. *Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura.*
2. *Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento.*
3. *Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces*

Agrarios y Rurales del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.

4. *Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales del mismo distrito.*
5. *Las demás que le asigne la Ley.*

3. De los Juzgados Agrarios y Rurales

Artículo 53A. Integración. *La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el Juzgado Agrario y Rural. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá implementar un plan y medidas de descongestión en los términos del artículo 63 de esta ley.*

Parágrafo 1º. *La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.*

Parágrafo 2º. *Los Juzgados Agrarios y Rurales contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera celeridad y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.*

Artículo 54A. Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural. *Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.*

Parágrafo. *Los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.*

Artículo 55A. Facilitadores Agrarios y Rurales. *Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales de la Jurisdicción Agraria y Rural contarán con un facilitador agrario y rural, profesional en Derecho y/o profesiones afines, cuya función será*

proveer información y orientación jurídica a los ciudadanos interesados en acceder a los servicios de administración de justicia en asuntos y controversias relacionados con la jurisdicción territorial de los circuitos y distritos judiciales agrarios y rurales, las competencias y trámites requeridos a la justicia agraria y rural, las rutas de acceso a la administración de justicia agraria y rural, entre otros, y podrán desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de sujetos de especial protección constitucional. Los facilitadores agrarios y rurales prestarán un servicio público gratuito que busca la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia. En este sentido, no podrá cobrarse a los usuarios por los servicios de información y orientación jurídica.

Parágrafo. *La formación de los facilitadores estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su vinculación se hará conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.*

Artículo 56A. Régimen de los Juzgados. *Los Juzgados Agrarios y Rurales que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.*

Parágrafo. *En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales, éstos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.*

Artículo 8º. *Modifíquese el artículo 50 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:*

“Artículo 50. *Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales, distritos judiciales administrativos o distritos judiciales agrarios y rurales. Los distritos judiciales administrativos y los distritos judiciales agrarios y rurales se dividen en*

circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.

La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia.”

Artículo 9º. Provisión de cargos. Para la provisión de los cargos de juez de los Juzgados Agrarios y Rurales y de magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales, el Consejo Superior de la Judicatura dispondrá de la realización de un concurso de méritos conforme a las reglas señaladas en la Ley e incorporará como criterio de valoración el conocimiento de la normativa en materia agraria, ambiental, en derecho administrativo y en las normas que desarrollan el proceso judicial agrario y rural, y el proceso contencioso administrativo.

Para lograr la cobertura de las zonas priorizadas según los criterios establecidos en el Acto Legislativo 03 de 2023, la provisión de los cargos de juez y magistrado en estos despachos podrá realizarse en provisionalidad, hasta tanto se surta el respectivo concurso y se provea el cargo en propiedad, de acuerdo con las listas respectivas. No obstante, para posesionarse y ejercer los cargos de juez y magistrado deberán tomar y aprobar, el curso de capacitación en la normatividad agraria y ambiental, en derecho administrativo, en el procedimiento judicial agrario y rural y en el proceso contencioso administrativo, de acuerdo con el plan que para tal fin diseñe e implemente la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, cuyo diseño deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.

Parágrafo 1º. El Consejo Superior de la Judicatura deberá convocar al concurso de méritos de que trata el parágrafo anterior dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la expedición de esta ley, fijando un cronograma que permita culminar el concurso y proveer los cargos por el sistema de carrera en un plazo no mayor a un (1) año.

Parágrafo 2º. Los exámenes de conocimiento en los concursos para proveer cargos de Jueces Agrarios y Rurales y Magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales comprenderán, en forma preponderante, temas de derecho agrario y derecho administrativo.

Artículo 10 Presupuesto. El Gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural asegurando la disponibilidad presupuestal de acuerdo con las leyes orgánicas de presupuesto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo establecido para el sector.

Artículo 11. Armonizaciones. De conformidad con el artículo 4º del Acto Legislativo de 2023, sustitúyase la expresión “Sala Civil y Agraria” por “Sala Civil, Agraria y Rural” en la Ley 270 de 1996 y demás normas que corresponda. Así mismo, inclúyase la expresión “y la jurisdicción agraria y rural” en todas las disposiciones de la Ley 270 de 1996 que hagan referencia a facultades, atribuciones y disposiciones comunes a las Jurisdicciones Ordinaria y Contenciosa Administrativa de que trata el Título Tercero de la Ley en cuestión.

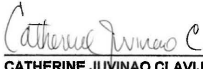
Artículo 12 Vigencias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,


HERÁCITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara


JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara

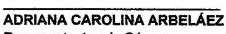

DEL CY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA
Representante a la Cámara

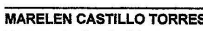

CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara

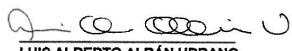

ORLANDO CASTILLO ADVINCULA
Representante a la Cámara


HERNÁN DARÍO CADAVID
Representante a la Cámara


JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara


MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara


LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 360 DE 2024 CÁMARA, 157 DE 2023 SENADO

por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Bogotá, D.C., abril de 2023.

Honorable Representante

ÓSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN

Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente

Cámara de Representantes.

Ciudad.

Referencia: Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

Honorable Representante:

En cumplimiento de la designación realizada por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 y ss., nos permitimos rendir **Informe de Ponencia Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.**

Cordialmente,

Cordialmente,

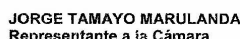

HERNÁN DARIO CADAVID MÁRQUEZ
Representante a la Cámara

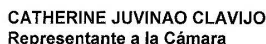

MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara

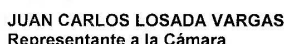

ORLANDO CASTILLO ADVINCULA
Representante a la Cámara

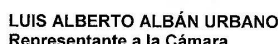

DELCY ESPERANZA ISAZA
Representante a la Cámara


JORGE TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara


CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara


HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara


JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Representante a la Cámara


LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2024 Senado, fue presentado por iniciativa del Ministro del Interior *Fernando Velazco Chaves*, el Ministro de Justicia y del Derecho *Néstor Iván Osuna Patiño*, la Ministra (e) de Agricultura y Desarrollo Rural *Aura María Duarte*, los honorables Senadores *Carlos Alberto Benavides Mora*, *Alexánder López Maya*, *Alfredo Deluque Zuleta*, *Alejandro Carlos Chacón*, *Wilson Arias Castillo*, *Clara López Obregón*, *Ariel Ávila Martínez*, *Julio Chagüi Flores*, *Aida Quilcué Vivas*, *Alejandro Vega Pérez*, *Julián Gallo Cubillos*, *Fabio Raúl Amín Salem*, *Berenice Bedoya Pérez*, *Pablo Catatumbo Torres*, *Robert Daza Guevara*, *Catalina del Socorro Pérez*, *Gloria Inés Flores Schneider*, *Isabel Cristina Zuleta López*, *Óscar Barreto Quiroga*, *Marcos Daniel Pineda*, *Imelda Daza Cotes*, *Alfredo Marín Lozano*, *Jairo Castellanos Serrano*, *Inti Raúl Asprilla Reyes*, *Carolina Espitia Jerez*, *Antonio Correa Jiménez*, *Édgar Díaz Contreras*, *Piedad Córdoba Ruíz*, *Alex Flores Hernández*, *Jahel Quiroga Carrillo*, *Aida Avella Esquivel*, *Sandra Ramírez Lobo*, *María José Pizarro*, *Martha Isabel Peralta*; y los honorables Representantes *Juan Carlos Wills Ospina*, *Gabriel Becerra Yáñez*, *Gabriel Parrado Durán*, *Agmeth Escaf Tijerino*, *Susana Gómez Castaño*, *Alejandro Ocampo Giraldo*, *Luis Alberto Albán Urbano*, *David Racero Mayorca*, *María del Mar Pizarro*, *Delcy Isaza Buenaventura*, *Juan Daniel Peñuela Calvache*, *Daniel Restrepo Carmona*, *Gerardo Yepes Caro*, *Alirio Uribe Muñoz*, *Heráclito Landínez*

Suárez, *María Fernanda Carrascal*, *Jorge Tamayo Marulanda*, *Andrés Cancimance López*, *Gloria Arizabaleta Corral*, *Eduard Sarmiento Hidalgo*, *Pedro Suárez Vacca*, *Alejandro Toro Ramírez*, *Jorge Bastidas Rosero* y *Leyla Rincón Trujillo*. Radicado el día 20 de septiembre de 2023 y publicado en la *Gaceta del Congreso* número 1351 de 2023.

La Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente Senado nombró como ponentes para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado, a los honorables Senadores *Alexánder López Maya*, *Carlos Fernando Mota Solarte*, *Alejandro Vega Pérez*, *Germán Blanco Álvarez*, *Alfredo Deluque Zuleta*, *Humberto de la Calle Lombana*, *María Fernanda Cabal* y *Julián Gallo Cubillos*.

Ponencia publicada en la *Gaceta del Congreso* número 1655 el 28 de noviembre de 2023.

El 12 de diciembre de 2023, se publica el informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate a Proyecto de Ley Estatutaria número 157-2023 Senado en la *Gaceta del Congreso* número 1771 de 2023.

El 13 de diciembre de 2023, fue publicada en la *Gaceta del Congreso* número 1776 la Carta de Adhesión al Proyecto de Ley Estatutaria número 157-2023 Senado, suscrita por el Senador Iván Cepeda.

El día 13 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la votación de la ponencia positiva y mayoritaria para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El texto aprobado en la Plenaria del Senado fue publicado en la *Gaceta del Congreso* número 08 de 2024.

El 20 de febrero de 2024, mediante radicado SLE-CS-1101-2023, el presidente del Senado de la República, doctor Iván Leónidas Name Vásquez, remitió al presidente de la Cámara de Representantes doctor Andrés Felipe Calle Aguas, el expediente contenido del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado y los archivos que lo componen.

El 22 de marzo de 2024, la Mesa Directiva de la Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de dicha corporación procedió, mediante oficio C.P.C.P. 3.1.-0887-2024, designar como ponentes para Primer Debate a los Honorables Representantes Heráclito Landínez Suárez - C, Juan Carlos Lozada Vargas -C, Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, Catherine Juvinao Clavijo, Orlando Castillo Advíncula, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Marelén Castillo Torres Y Luis Alberto Albán Urbano, el día 21 de marzo de 2024.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

En cumplimiento del mandato contenido en el Acto Legislativo número 03 de 2023, el Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, tiene por objeto establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural a través de la modificación de la Ley 270 de 1996.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

El articulado del proyecto originalmente radicado consta de doce (12) artículos a saber:

| Número del artículo | Resumen del Contenido |
|---------------------|---|
| Art. 1° | Define el Objeto del Proyecto de Ley |
| Art. 2° | Modifica el artículo 11° de la Ley 270 de 1996 para incluir la Jurisdicción Agraria y Rural en la integración de la Rama Judicial |
| Art. 3° | Modifica el artículo 12° de la Ley 270 de 1996 para investir a la Jurisdicción Agraria y Rural de facultades jurisdiccionales |
| Art. 4° | Modifica el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 con el fin de cambiar nombre de la “Sala de Casación Civil y Agraria” de la Corte Suprema de Justicia reemplazándolo por el nombre “Sala de Casación Civil, Agraria y Rural”, ya que el Acto Legislativo 03 de 2023 modifica la nominación de esta sala. |
| Art. 5° | Modifica el artículo 34 de la Ley 270 de 1996, y cambia el número de Magistrados del Consejo de Estado, aumentando la cifra de treinta y uno (31) magistrados a treinta y tres (33) magistrados |
| Art. 6° | Modifica el artículo 36 de la Ley 270 de 1996 con el objetivo de ubicar a los dos magistrados adicionales en la Sección Primera del Consejo de Estado. |
| Art. 7° | Crea un nuevo capítulo en el título tercero de la Ley 270 de 1996. El nuevo capítulo que se propone incluir se compone de seis (6) artículos que establecen la creación de los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales, así como su integración y funciones, contemplando la posibilidad de que los juzgados tengan más de un juez si así lo considera necesario el Consejo Superior de la Judicatura. |
| Art. 8° | Modifica el artículo 50° de la Ley 270 de 1996 que originalmente se ocupa de la “desconcentración y división del territorio para efectos judiciales” a fin de incorporar la figura de “Distritos Judiciales Agrarios y Rurales” en las disposiciones referidas a la desconcentración de la administración de Justicia en el territorio nacional. |
| Art. 9° | Establece los parámetros para la provisión de cargos en la Jurisdicción Agraria y Rural, definiendo que, entre las cualidades para la selección de los jueces y operadores de justicia en la jurisdicción agraria y rural deberán tenerse en cuenta amplios conocimientos en Derecho Agrario y Derecho Administrativo. |
| Art. 10 | Contiene las disposiciones referidas al presupuesto y los recursos para la operación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en atención a la solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Art. 11 | Armonizar las modificaciones introducidas en el Acto Legislativo 03 de 2023 con la legislación y la Ley 270 de 1996. |
| Art. 12 | Establece que la Ley sometida a consideración rige a partir del momento de su promulgación. |

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

4.1 El Acto Legislativo 03 de 2023

En julio de 2023 el Estado colombiano cumplió, mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 con una parte de los compromisos adquiridos en los subpuntos 1.1.5 y 1.1.8 del Acuerdo Final de Paz, relativos con la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

El artículo 4° del referido Acto Legislativo 03 de 2023 *“Por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural”* estableció que:

“(…) Artículo 4°. El Congreso de la República tramitará y expedirá en la siguiente legislatura la Ley por medio de la cual se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el procedimiento especial agrario y rural. (...)”.

Como puede evidenciarse, la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria y Rural le asignó al Congreso de la República la responsabilidad de tramitar las normas para establecer las condiciones óptimas y necesarias para que se pudiera poner en marcha la nueva jurisdicción en la Rama Judicial. En consecuencia, el proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia cumple con una parte importante de ese mandato, a saber: establecer la estructura e integración de la nueva infraestructura judicial que

dará forma y cuerpo a la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

4.2 Una infraestructura judicial especializada para las controversias agrarias

La creación de una Jurisdicción Agraria y Rural implica la creación de una infraestructura judicial nueva al interior de la Rama Judicial, concebida como autónoma y especializada en controversias y conflictos de naturaleza agraria y rural, capaz de atender las demandas de justicia de las poblaciones rurales en lo que respecta a sus relaciones de producción agraria y de tenencia de tierras rurales. De allí que el Acto Legislativo 03 de 2023 reconozca la importancia de la creación de esta jurisdicción para atender las necesidades de las poblaciones rurales campesinas y étnicas, y esté disponible, de manera prioritaria, en aquellas zonas con alta conflictividad agraria y rural.

En virtud de esta consideración, el Consejo Superior de la Judicatura ha iniciado el despliegue gradual y progresivo de las disposiciones necesarias para poner en marcha la nueva jurisdicción agraria y rural. En esa dirección, el 29 de diciembre de 2023 expidió el Acuerdo PCSJA23-12132 de 2023 *“Por el cual se crea un distrito judicial, unos circuitos judiciales y unos despachos judiciales, con carácter permanente, en la jurisdicción Agraria y Rural y se dispone su implementación gradual y progresiva”* en el que ordena la creación de un distrito judicial agrario y rural de Tunja conformado por cinco (5) circuitos agrarios y rurales de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja; Creación de tres (3)

despachos de Magistrados del Tribunal Agrario y Rural; una Secretaria y los primeros cinco (5) juzgados de tipo agrario y rural, que entran a funcionar a partir del 2 de mayo de 2024.

Este esfuerzo adelantado por la rama judicial amerita correspondencia paralela por parte del Congreso de la República para garantizar -por vía de ley- las disposiciones necesarias para que se disponga la organización, estructura y recursos necesarios para la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en todo el territorio nacional.

Lo anterior, pone al legislador en la tarea de imaginar una jurisdicción a través de la cual se administre justicia a nivel nacional, pero de forma diferenciada, considerando las circunstancias geográficas, productivas y ambientales de las zonas donde se espera lleguen las instituciones judiciales, y atendiendo a las características poblacionales de quienes son los potenciales usuarios de esta jurisdicción. Esta especificidad de la justicia agraria y rural requiere necesariamente de la puesta en marcha de dos procesos: la creación de tribunales y jueces especializados con presencia en las zonas con mayores demandas de justicia; y el establecimiento de instituciones distintas a las que hoy componen la rama judicial.

El proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia modifica los artículos 11, 12, 16, 34, 36, 50 agrega un Capítulo IV al Título Tercero de la Ley 270 de 1996, en los que se incluye en la estructura de la Rama Judicial la Jurisdicción Agraria y Rural, los jueces y tribunales agrarios y rurales que la componen. Asimismo, reafirma las reglas establecidas en el Acto Legislativo 03 de 2023 respecto de los criterios que deben primar en la definición de las zonas donde deben ser instalados los despachos judiciales y agrarios, y de la necesidad de que dicha tarea surja del trabajo colaborativo entre el Consejo Superior de la Judicatura y los Ministerios de Justicia y del Derecho y Agricultura y Desarrollo Rural. Finalmente, crea los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural, instituciones específicas para el servicio de la justicia agraria y la figura del facilitador/a agrario y rural.

El proyecto de ley del que se ocupa la presente ponencia contempla la creación de una estructura judicial agraria y rural conformada por:

- (a) Juzgados Agrarios y Rurales organizados en el nivel de Circuitos, y cuyas competencias están definidas con claridad en el proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado, que actualmente cursa en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República.
- (b) Distritos judiciales agrarios y rurales sobre los que operan tribunales agrarios y rurales diferentes a los que actualmente operan para la jurisdicción ordinaria y/o contenciosa administrativa y cuyas competencias

también están determinadas en el Proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado.

Se crea dos (2) figuras que concurren con la atención de las especificidades que implica una infraestructura judicial especializada para las controversias agrarias y rurales:

- **Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural:** son equipos interdisciplinarios de profesionales que apoyarán la labor de los juzgados agrarios y rurales en todo el proceso judicial, incluyendo las labores de peritaje, análisis de contexto, entre otras.
- **Facilitadores:** se trata de una persona que ofrecerá apoyo y orientación a las comunidades y usuarios de la justicia agraria en los territorios. Esta orientación consistirá en resolver dudas de los usuarios y explicarles -por ejemplo- cuáles son los procedimientos de los procesos a los que quieren acceder, las condiciones mínimas de la acción agraria, los tiempos que tiene la justicia para ofrecer una respuesta, etc.

Es importante, tener en cuenta que la Ley original establece la posible creación de (33) Juzgados Agrarios y Rurales; y seis (6) Tribunales Agrarios y Rurales con competencia en todo el territorio nacional. No obstante, es una estimación ilustrativa a fin de posible impacto fiscal de la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y rural de esas características. El carácter no vinculante de este número de juzgados que se estima en el proyecto de ley original se debe a que la competencia para establecer la distribución y número de operadores judiciales necesarios es exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus competencias de administrador de la Rama Judicial.

Con respecto a la creación de dos (2) nuevas plazas para la sección primera del Consejo de Estado. Los autores de la presente ponencia resaltan que la creación de estas dos (2) plazas se refiere a lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto original con la solicitud realizada por el Consejo de Estado expresada en la fase de diseño del proyecto de ley, bajo la necesidad de contar con más magistrados para atender posibles congestiones judiciales que se presenten en el futuro. La creación de las dos plazas no se hizo para la Sección Tercera (que es la que conoce de asuntos agrarios) sino para la Sección Primera porque el Consejo de Estado manifestó que está en curso el traslado de competencias - en los asuntos agrarios - de la sección tercera a la sección primera.

5. Proposiciones presentadas en Plenaria del Senado de la República

En el curso de los dos primeros debates reglamentarios se presentaron las proposiciones relacionadas en el siguiente cuadro:

| Autor | Artículo del que se ocupa la proposición | Sentido de la Proposición | Decisión |
|---|--|--|--|
| Honorable Senadora Paloma Valencia (Partido Centro Democrático) | Artículo 9° | Reorganizar los cargos existentes en la Jurisdicción Ordinaria, sin aumentar ningún cargo burocrático adicional al ya existente. | Constancia. Comisión Primera Constitucional Permanente Senado. |
| Honorable Senador Humberto de la Calle Lombana | Artículo 11 Artículo 7° Artículo 16 Artículo 2° | Elimina la Sala Agraria y Rural y para estos asuntos la competencia radica en la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. Ajusta la Sala Mixta Agraria y Rural. | No aprobado. Comisión Primera Constitucional Permanente Senado. |
| Honorable Senadora Ana Paola Agudelo García (Partido MIRA) Honorable Senador Manuel Virgüez Piraquive (Partido MIRA) | Artículo 7° | Adicionar el siguiente inciso al nuevo artículo 56A de la Ley 270 de 1996, contenido en el artículo 7° del proyecto de Ley: “(…)En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. <i>La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.”</i> | Aprobado por la Plenaria de Senado |

6. IMPACTO FISCAL

Antes de la radicación del Proyecto de Ley el 20 de septiembre de 2023, el anteproyecto fue sometido a revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de estimar el posible impacto fiscal que tendría la implementación de la estructura e integración de la Jurisdicción Agraria y Rural. Con base en el concepto referido, los autores de la iniciativa hicieron el cálculo de los costos eventuales que podría tener la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, refiriendo en la exposición de motivos del proyecto de ley, que la creación y operación de la nueva Jurisdicción “(…) podría implicar un impacto fiscal anual cercano a los \$134.816.305.080 pesos.

Con lo anterior se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley 819 de 2003 en relación con la obligación de indicar en la exposición de motivos de los proyectos de ley el eventual impacto fiscal de las iniciativas que se tramiten ante el Congreso de la República.

Ahora bien, el pasado 5 de marzo de 2024, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió al Congreso de la República su concepto de impacto y disponibilidad fiscal acerca de la iniciativa. En el referido concepto el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público finaliza con su análisis refiriendo lo siguiente:

“(…) *atendiendo lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 y en consonancia con lo señalado en el artículo 10 de la iniciativa, referente a la garantía por parte del Gobierno nacional sobre los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, se tienen previstos los recursos para atender la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural hasta por la suma de 134.8 mil millones de pesos (…)*”.

El anterior concepto opera como garantía de la existencia de los recursos necesarios para debatir y aprobar esta iniciativa legislativa que permitirá poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y de la Sentencia SU 288 de 2022.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Para dar trámite al presente Proyecto de Ley Estatutaria, en nuestra condición de ponentes, ponemos a consideración de la corporación el siguiente pliego de modificaciones, anotando que se solicita que los artículos no referidos en el siguiente cuadro se mantengan igual que en la versión aprobada en segundo debate en Plenaria de Senado de la República:

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| <p>Artículo 2°. Integración de la Rama Judicial. Agréguese un literal al artículo 11 de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:</p> <p>“(…)</p> <p>De la Jurisdicción Agraria y Rural: Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en los asuntos de su respectiva competencia. Tribunales Agrarios y Rurales. Jueces Agrarios y Rurales. (...)”</p> | <p>Artículo 2°. Integración de la Rama Judicial. Agréguese un literal al artículo 11 de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:</p> <p>“(…)</p> <p>De la Jurisdicción Agraria y Rural: Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en los asuntos de su respectiva competencia. Tribunales Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras. Jueces Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras. (...)”</p> | <p>Integración de los Jueces de Restitución de Tierras y Jueces Agrarios y Rurales</p> <p>El Acto Legislativo 03 de 2023 “<i>por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural</i>”, en su artículo 2° adicionó el Título VIII de la Constitución Política de Colombia (De la Rama Judicial) el Capítulo III-A, “De la Jurisdicción Agraria y Rural”, en los siguientes términos:</p> |
| <p>Artículo 7°. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:</p> <p>“(…)</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV-A</p> <p style="text-align: center;">De la Jurisdicción Agraria y Rural de artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural</p> <p>La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales:</p> <p>Del órgano de Cierre.</p> <p>Artículo 50A. Integración. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.</p> <p>De los Tribunales Agrarios y Rurales.</p> <p>Artículo 51A. Jurisdicción.</p> <p>Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.</p> <p>Artículo 52A. De la sala plena. La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones: Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces Agrarios y Rurales del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales del mismo distrito. Las demás que le asigne la Ley.</p> <p>De los Juzgados Agrarios y Rurales</p> | <p>Artículo 7°. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:</p> <p>“(…)</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV-A</p> <p style="text-align: center;">De la Jurisdicción Agraria y Rural de Artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural</p> <p>La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras. y los Juzgados Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras:</p> <p>Del órgano de Cierre.</p> <p>Artículo 50A. Integración. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.</p> <p>De los Tribunales Agrarios y Rurales.</p> <p>Artículo 51A. Jurisdicción.</p> <p>Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas Agraria y Rural y de Restitución de Tierras y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.</p> <p>Artículo 52A. De la sala plena. La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones: Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de restitución de tierras de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales del mismo distrito. Las demás que le asigne la Ley. De los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras.</p> | <p style="text-align: center;">CAPÍTULO 3A.</p> <p style="text-align: center;">De la Jurisdicción Agraria y Rural</p> <p>Artículo 238A. Créase la Jurisdicción Agraria Rural. La ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural, con base en los principios y criterios del derecho agrario señalados en la Ley, y con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos y a los Grupos étnicos: Comunidades negras o afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado.</p> <p>Como quiera que, con la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural se definió a la Ley con la garantía del acceso efectivo a la justicia la protección entre otros a las víctimas del conflicto armado, de ahí que resulte oportuno algunos ajustes al proyecto de ley estatutaria, para en el apartado correspondiente, (Artículo 7° del proyecto) creación de tribunal agrario y rural, especificar que estará integrado por dos (2) salas una Agraria y Rural y otra Agraria de Restitución de Tierras.</p> <p>Justificación:</p> <p>No se mezclarán sus competencias, ni sus procedimientos el marco de referencia de cada una y que es el siguiente:</p> <p>Restitución de Tierras prioriza como sujetos procesales a las víctimas de abandono y/o despojo forzado en el marco del conflicto armado; la Jurisdicción Agraria, por su parte, protege a la población rural representada en los campesinos como sujetos de especial protección constitucional y en los Grupos étnicos, para la transformación estructural del campo.</p> <p>Tal y como lo contempla el Acto Legislativo, se complementan en lo relacionado con i) el cumplimiento de las obligaciones del Estado, ii) protegen sujetos muy vulnerables y sobre todo iii) ambas ostentan una indiscutible relación jurídica con la tierra.</p> <p>Relación jurídica con la Tierra, que, por el contrario, no existe, al menos de manera tan diáfana, entre la Jurisdicción Ordinaria Civil y su especialidad de Restitución de Tierras a la que en la actualidad pertenece y que probablemente, debido a que para el 2011 el Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral, no existía; era entendible que se le asignara a la Jurisdicción Ordinaria Civil, la especialidad de Restitución de Tierras.</p> |

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | COMENTARIOS |
|--|--|---|
| <p>Artículo 53A. Integración. La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el Juzgado Agrario y Rural. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear jueces adjuntos en los despachos judiciales, asignando a cada uno el reparto individual de los procesos que corresponda para su conocimiento y decisión, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 63° de esta ley.</p> <p>Parágrafo 1º. La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.</p> <p>Parágrafo 2º. Los Juzgados Agrarios y Rurales contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera cèlere y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.</p> <p>Artículo 54A. Centros especializados de apoyo técnico agrario y rural. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural que, a su vez, estarán conformados por (1) Coordinador y cinco (5) profesionales seleccionados de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo. Los Centros Especializados de Apoyo Técnico serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de hasta un (1) Tribunal Agrario y Rural y dos (2) juzgados agrarios y rurales respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 55A. Facilitadores agrarios y rurales. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales de la Jurisdicción Agraria y Rural contarán con un facilitador agrario y rural, profesional en Derecho y/o profesiones afines, cuya función será proveer información y orientación jurídica a los ciudadanos interesados en acceder a los servicios de administración de justicia en asuntos y controversias relacionados con la jurisdicción territorial de los circuitos y distritos judiciales agrarios y rurales, las competencias y trámites requeridos a la justicia agraria y rural, las rutas de acceso a la administración de justicia agraria y rural, entre otros, y podrán desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de sujetos de especial protección constitucional.</p> | <p>Artículo 53A. Integración. La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el <u>Juzgado Agrario y Rural y el Agrario de Restitución de Tierras</u>. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear jueces adjuntos en los despachos judiciales, asignando a cada uno el reparto individual de los procesos que corresponda para su conocimiento y decisión, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 63° de esta ley.</p> <p>Parágrafo 1º. La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales <u>y Agrarios de Restitución de Tierras</u> se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.</p> <p>Parágrafo 2º. Los Juzgados Agrarios y Rurales <u>y Agrarios de Restitución de Tierras</u>, contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera cèlere y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.</p> <p>Artículo 54A. Centros especializados de apoyo técnico agrario y rural. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales <u>y Agrarios de Restitución de Tierras</u> se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales <u>y Agrarios de Restitución de Tierras</u> para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural que, a su vez, estarán conformados por (1) Coordinador y cinco (5) profesionales seleccionados de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo. Los Centros Especializados de Apoyo Técnico serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de hasta un (1) Tribunal Agrario y Rural y dos (2) juzgados agrarios y rurales <u>y Agrarios de Restitución de Tierras</u> respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 55A. Facilitadores agrarios y rurales. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales de la Jurisdicción Agraria y Rural contarán con un facilitador agrario y rural, profesional en Derecho y/o profesiones afines, cuya función será proveer información y orientación jurídica a los ciudadanos interesados en acceder a los servicios de administración de justicia en asuntos y controversias relacionados con la jurisdicción territorial de los circuitos y distritos judiciales agrarios y rurales, las competencias y trámites requeridos a la justicia agraria y rural, las rutas de acceso a la administración de justicia agraria y rural, entre otros, y podrán desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de sujetos de especial protección constitucional.</p> | <p>Pero hoy, que se creó la Jurisdicción Agraria, contundente resulta, principalmente por la coincidencia de la Relación Jurídica con la Tierra y por la condición de suma vulnerabilidad de los sujetos que ambas protegen, la especialidad de Restitución de Tierras de la Jurisdicción Ordinaria Civil pase a formar parte de la Jurisdicción Agraria, eso sí, conservando total independencia, en lo que a sus competencias y procedimientos se refiere.</p> <p>Adicionalmente,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los jueces de restitución de tierras tienen un inigualable conocimiento de los territorios a su cargo, en cuanto a sus contextos históricos, económicos, sociales, políticos y de violencia, todo lo cual facilita considerablemente la adopción de decisiones con inclusión de las medidas necesarias para cada uno de ellos, así como el desplazamiento por las diferentes regiones. 2. Por cuenta de las competencias y facultades previstas en la Ley 1448 de 2011, los jueces de restitución de tierras poseen amplios conocimientos sobre de la legislación agraria y civil necesaria para resolver los asuntos atribuidos a los jueces agrarios y rurales, los que ha adquirido no solo por la experiencia propia de las funciones, sino por la completa capacitación impartida desde la entrada en vigencia de la Ley de víctimas a expensas de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en coordinación con USAID, con el apoyo de la academia. 3. Por la necesidad de articulación interinstitucional, los jueces de restitución de tierras sostienen de manera permanente, reuniones y audiencias con las diferentes entidades de los distintos órdenes, actos que resultan vitales en los trámites agrarios y rurales para la satisfacción de las garantías de la población campesina. 4. Comoquiera que uno de los problemas más profundos en los procesos de restitución de tierras, es la identificación predial, aspecto que resulta imperativo en los asuntos de naturaleza rural y agraria, los servidores de la especialidad cuentan con una gran experiencia para acudir a los mecanismos e instituciones que corresponden en procura de determinar con claridad aspectos físicos y jurídicos de los predios, logrando con ello la seguridad jurídica como premisa de los asuntos de esta naturaleza. 5. Los jueces de restitución de tierra cuentan con un manejo profundo en el expediente digital que, como se propuso, debe imponerse para el proceso agrario y rural. 6. De la misma forma, la experiencia en la atención al público rural por su permanente contacto y la recepción de pruebas con una mayor participación de población campesina, le permite al juez de restitución de tierras contar con la sensibilidad suficiente para facilitar el avance del proceso de naturaleza agraria y rural de cara a los usuarios de la jurisdicción. 7. Los juzgados de restitución de tierras cuentan con el manejo de las audiencias virtuales con la intervención de las distintas entidades del orden municipal, con quienes se ha avanzado de forma importante en la coordinación de esta clase de diligencias, lo que facilitará en gran medida el avance de los procesos. 8. Por el diseño del proceso de restitución de tierras, el juez de restitución maneja con suficiencia el tratamiento diferenciado de sujetos de especial protección constitucional que ha de ser recogida por la legislación que gobierna la jurisdicción agraria y rural. 9. Por su competencia para adelantar procesos de restitución territorial colectiva a favor de comunidades étnicas, palenqueras y raizales, cuenta también |

| TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE SENADO | MODIFICACIONES PROPUESTAS | COMENTARIOS |
|--|--|---|
| <p>Los facilitadores agrarios y rurales prestarán un servicio público gratuito que busca la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia. En este sentido, no podrá cobrarse a los usuarios por los servicios de información y orientación jurídica.</p> <p>Parágrafo. La formación de los facilitadores estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su vinculación se hará conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 56A. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Agrarios y Rurales que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.</p> <p>Parágrafo. En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales, éstos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.</p> | <p>Los facilitadores agrarios y rurales prestarán un servicio público gratuito que busca la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia. En este sentido, no podrá cobrarse a los usuarios por los servicios de información y orientación jurídica.</p> <p>Parágrafo. La formación de los facilitadores estará a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su vinculación se hará conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Artículo 55A. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.</p> <p>Parágrafo. En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras, éstos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.</p> | <p>con el conocimiento de tales comunidades y de los mecanismos de garantía de sus derechos.</p> <p>10. El proceso de restitución de tierras cuenta también con una etapa posfallo cuyo tratamiento aportará de manera importante en las funciones a desarrollar en materia agraria y rural.</p> <p>11. Y es más, ante la temporalidad propia de la especialidad de Restitución de Tierras que de no ser prorrogada, fenecerá el 10 de junio de 2031, y por su parte la vocación de permanencia de la Jurisdicción Agraria, nada mejor que prever desde ya en dicho texto de Ley Estatutaria, la posibilidad para la autoridad competente que en el momento en que deje de existir la especialidad de Restitución de Tierras, le sea dado contemplar la conveniencia de convertir a los magistrados, jueces y empleados de carrera, en funcionarios y empleados agrarios y rurales, aprovechando el innegable bagaje, experiencia y formación profesional de tantos años en una materia de Tierras del todo afin a la Agraria y Rural.</p> <p>La figura del “facilitador” consagrada en el numeral 8, puede ser suplida por otras entidades, organismos o autoridades que actualmente cumplen el rol de orientar a los ciudadanos para que se acerquen efectivamente ante la justicia (Defensoría del Pueblo). Además, al existir la opción de que sean “profesionales en Derecho y/profesiones afines”, no se asegura que necesariamente deban tener conocimientos jurídicos y, por ende, que puedan orientar en debida forma a los ciudadanos.</p> <p>Al margen de lo anterior, el hecho de que puedan informar y orientar a los ciudadanos para acceder a los servicios de la administración de justicia, y al mismo tiempo “desarrollar las actuaciones que le sean asignadas por los jueces del circuito”, los termina convirtiendo en “juez y parte”, generando un eventual conflicto de intereses.</p> |

6. CONFLICTO DE INTERÉS

Con base en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, según el cual el autor del proyecto y los ponentes presentan en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describe las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1°. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: (...)

a) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique*

normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

- b) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*
- c) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

- a) *Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.*
- b) *Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*
- c) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o*

acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

- d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.
- e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.
- f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)."

De lo anterior y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este proyecto de ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a) del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

7. PROPOSICIÓN

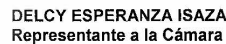
En relación con los puntos anteriormente expuestos y dada la importancia que esta iniciativa legislativa reviste, presentamos ponencia y solicitamos a los honorables miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes debatir y aprobar **Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones, conforme al texto propuesto a continuación.

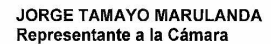

HERNÁN DARIO CADAVID MÁRQUEZ
Representante a la Cámara

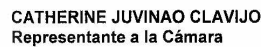

MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara

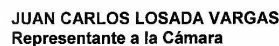

ORLANDO CASTILLO ADVINCULA
Representante a la Cámara



DELCY ESPERANZA ISAZA
Representante a la Cámara


JORGE TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara


CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara


HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara


JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Representante a la Cámara


LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 360 DE 2024 CÁMARA, 157 DE 2023 SENADO

por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, en armonía con la Ley Estatutaria 270 de 1996 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2023.

Artículo 2º. Integración de la Rama Judicial. Agréguese un literal al artículo 11 de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor:

“(…)

g) De la Jurisdicción Agraria y Rural:

- 1) Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en los asuntos de su respectiva competencia.
- 2) Tribunales Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras.
- 3) Jueces Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras. (...).”

Artículo 3º. Modifíquese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

“(…) Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción agraria y rural, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la Ley a otra jurisdicción.”

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, integrada por siete Magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve Magistrados. Salvo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción Agraria y Aural, las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos.

Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán como único fin tramitar y decidir los recursos de casación que determine la Sala de Casación Laboral de esta Corte. Los Magistrados de Descongestión no harán parte de la Sala Plena, no tramitarán tutelas, ni recursos de revisión, no conocerán de las apelaciones en procesos especiales de calificación de suspensión o paro colectivo del trabajo, ni de los conflictos de competencia, que en el ámbito de su especialidad se susciten, y no tendrán funciones administrativas. El reglamento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del reparto de los procesos.

Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida.

La elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución y la Ley para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas salas.”

Artículo 5º. Modifíquese el inciso primero del artículo 34 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 34. Integración y Composición. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y

estará integrado por treinta y tres (33) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (...)”.

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 36. De la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la Ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:

La Sección Primera, por seis (6) magistrados.

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados.

La Sección Tercera se dividirá en tres (3) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.

La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados, y

La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados.

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la Ley, el reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada Sección y a las respectivas Subsecciones.

En todo caso, la acción de pérdida de investidura de congresistas será de competencia de la sala plena de lo contencioso administrativo.

Parágrafo Transitorio. Los nuevos despachos que por medio de esta ley se crean para la integración de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrán la misma organización y estructura que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa Sección”.

Artículo 7º. Agréguese un Capítulo IV-A al Título Tercero de la Ley 270 de 1996 del siguiente tenor: “(...)

CAPÍTULO IV-A

De la Jurisdicción Agraria y Rural de artículo 49A. Integración de la Jurisdicción Agraria y Rural

La Jurisdicción Agraria y Rural está integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en los asuntos de su competencia; así como por los Tribunales Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras., y los Juzgados Agrarios y Rurales y de Restitución de Tierras:

1. Del órgano de Cierre

Artículo 50A. Integración. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de

Justicia es el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, sin perjuicio de las competencias que el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Consejo de Estado.

2. De los Tribunales Agrarios y Rurales

Artículo 51A. Jurisdicción. Los Tribunales Agrarios y Rurales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la Ley procesal en cada distrito judicial agrario y rural. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas Agraria y Rural y de Restitución de Tierras y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la Ley.

Artículo 52A. De la sala plena. La Sala Plena de los Tribunales Agrarios y Rurales, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones:

1. Elegir los jueces de lo Agrarios y Rurales de restitución de tierras de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura.
 2. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la Ley o al reglamento.
 3. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Jueces Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.
 4. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos Jueces Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras del mismo distrito.
 5. Las demás que le asigne la Ley.
3. De los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras.

Artículo 53A. Integración. La célula básica de la organización judicial para la administración de justicia agraria y rural es el Juzgado Agrario y Rural y el Agrario de Restitución de Tierras. El mismo se integrará por los jueces, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de servicios identificadas por este último. Cuando

el número de asuntos o procesos agrarios y rurales por juzgado así lo justifique, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear jueces adjuntos en los despachos judiciales, asignando a cada uno el reparto individual de los procesos que corresponda para su conocimiento y decisión, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 63 de esta ley.

Parágrafo 1º. La creación progresiva de los juzgados agrarios y rurales y Agrarios de Restitución de Tierras se hará de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023.

Parágrafo 2º. Los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras, contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios, conformados a partir del reconocimiento de las necesidades que requieren los asuntos a su cargo, a efectos de administrar justicia de manera celeré y en estricta aplicación de los principios y procedimientos del Derecho Agrario.

Artículo 54A. Centros especializados de apoyo técnico agrario y rural. Los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras se apoyarán en equipos interdisciplinarios cuya función será ofrecer el soporte técnico, pericial y de contexto requerido por los Magistrados y Jueces Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras para la debida administración de justicia, en atención a la normatividad, singularidad y territorialidad de las controversias agrarias y rurales. Los equipos interdisciplinarios de que trata el presente artículo integrarán los Centros Especializados de Apoyo Técnico Agrario y Rural que, a su vez, estarán conformados por (1) Coordinador y cinco (5) profesionales seleccionados de acuerdo con las necesidades de servicio identificadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Parágrafo. Los Centros Especializados de Apoyo Técnico serán creados por el Consejo Superior de la Judicatura y podrán atender las necesidades de servicios de hasta un (1) Tribunal Agrario y Rural y dos (2) juzgados agrarios y rurales y Agrarios de Restitución de Tierras respectivamente, de acuerdo con la demanda y distribución que determine el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 55A. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Agrarios y Rurales y Agrarios de Restitución de Tierras que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la Ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Agraria y Rural. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Parágrafo. En lo que refiere a la gestión administrativa de los Juzgados Agrarios y Rurales

y Agrarios de Restitución de Tierras, estos podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.” En las zonas rurales en donde haya poca presencia de entidades de la rama ejecutiva, el Consejo Superior de la Judicatura coordinará la creación de nuevos despachos judiciales, teniendo en cuenta las zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en función de los volúmenes demográficos y rurales, pocas vías de comunicación y medios de transporte. La creación de estos despachos judiciales se realizará bajo los principios de sostenibilidad fiscal, gradualidad, progresividad, y de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

“**Artículo 50.** Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales, distritos judiciales administrativos o distritos judiciales agrarios y rurales. Los distritos judiciales administrativos y los distritos judiciales agrarios y rurales se dividen en circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.

La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia.”

Artículo 9°. Provisión de cargos. Para la provisión de los cargos de juez de los Juzgados Agrarios y Rurales y de magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales, el Consejo Superior de la Judicatura dispondrá de la realización de un concurso de méritos conforme a las reglas señaladas en la Ley e incorporará como criterio de valoración el conocimiento de la normativa en materia agraria, ambiental, en derecho administrativo y en las normas que desarrollan el proceso judicial agrario y rural, y el proceso contencioso administrativo.

Para lograr la cobertura de las zonas priorizadas según los criterios establecidos en el Acto Legislativo 03 de 2023, la provisión de los cargos de juez y magistrado en estos despachos podrá realizarse en provisionalidad, hasta tanto se surta el respectivo concurso y se provea el cargo en propiedad, de acuerdo con las listas respectivas. No obstante, para posesionarse y ejercer los cargos de juez y

magistrado deberán tomar y aprobar, el curso de capacitación en la normatividad agraria y ambiental, en derecho administrativo, en el procedimiento judicial agrario y rural y en el proceso contencioso administrativo, de acuerdo con el plan que para tal fin diseñe e implemente la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, cuyo diseño deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.

Parágrafo 1°. El Consejo Superior de la Judicatura deberá convocar al concurso de méritos de que trata el parágrafo anterior dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la expedición de esta ley, fijando un cronograma que permita culminar el concurso y proveer los cargos por el sistema de carrera en un plazo no mayor a un (1) año.

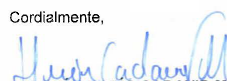
Parágrafo 2°. Los exámenes de conocimiento en los concursos para proveer cargos de Jueces Agrarios y Rurales y Magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales comprenderán, en forma preponderante, temas de derecho agrario y derecho administrativo.

Artículo 10. Presupuesto. El Gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural asegurando la disponibilidad presupuestal de acuerdo con las leyes orgánicas de presupuesto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo establecido para el sector.

Artículo 11. Armonizaciones. De conformidad con el artículo 4° del Acto Legislativo de 2023, sustitúyase la expresión “Sala Civil y Agraria” por “Sala Civil, Agraria y Rural” en la Ley 270 de 1996 y demás normas que corresponda. Así mismo, inclúyase la expresión “y la jurisdicción agraria y rural” en todas las disposiciones de la Ley 270 de 1996 que hagan referencia a facultades, atribuciones y disposiciones comunes a las Jurisdicciones Ordinaria y Contenciosa Administrativa de que trata el Título Tercero de la Ley en cuestión.

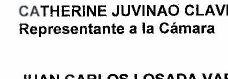
Artículo 12. Vigencias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

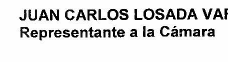
Cordialmente,


HERNÁN DARIO CADAVID MÁRQUEZ
Representante a la Cámara


ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ
Representante a la Cámara



DELCY ESPERANZA ISAZA
Representante a la Cámara


CATHERINE JUVINAO CLAVIJO
Representante a la Cámara


JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Representante a la Cámara


MARELEN CASTILLO TORRES
Representante a la Cámara


ORLANDO CASTILLO ADVINCULA
Representante a la Cámara


JORGE TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara


HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ
Representante a la Cámara


LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO
Representante a la Cámara

CONTENIDO

Gaceta número 409 - Martes, 16 de abril de 2024

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

Págs.

Informe de ponencia, pliego de modificaciones y texto propuesto para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, y se adoptan otras disposiciones..... 1

Informe de Ponencia, pliego de modificaciones y Texto Propuesto para primer debate del Proyecto de ley Estatutaria número 360 de 2024 Cámara, 157 de 2023 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, y se adoptan otras disposiciones Hernán Darío Cadavid Márquez y otros..... 20